

Resumen del consejo sobre la cuenta de pago básica

El proyecto de ordenanza nacional que contiene normas sobre una cuenta de pago básica para los consumidores (Ordenanza Nacional sobre Cuentas de Pago Básicas) tiene como objetivo, según el preámbulo, mejorar el acceso de los consumidores a servicios de pago digitales seguros, asequibles y confiables. En línea con los desarrollos internacionales, donde mundialmente, como resultado del aumento de la digitalización, los países se han comprometido a promover la inclusión financiera como parte de su estrategia nacional, el gobierno de Curazao ha establecido el objetivo de desarrollar una economía moderna y socialmente inclusiva.

Una economía moderna y socialmente inclusiva depende cada vez más de la provisión de servicios de pago. Es necesario que los consumidores puedan acceder a transacciones de pago (sin efectivo) y a una serie de servicios financieros básicos. Tener al menos una cuenta de pago (básica) proporciona este acceso. El proyecto está destinado, particularmente, a ofrecer un acceso de bajo umbral a transacciones de pago (sin efectivo) a aquellos en la sociedad que, por cualquier razón, no tienen o no pueden obtener una cuenta de pago.

El SER apoya el objetivo del proyecto de ordenanza nacional, pero enfatiza que la inclusión financiera implica más que simplemente tener una cuenta bancaria. También incluye la promoción de los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar los servicios ofrecidos de manera efectiva. El SER identifica puntos importantes de atención con respecto a la alfabetización financiera y la protección al consumidor.

El SER subraya la importancia de la educación financiera para promover la inclusión financiera. Un programa de alfabetización financiera es esencial para permitir que los consumidores tomen decisiones financieras acertadas. El programa debe tener objetivos claros, desarrollar materiales relevantes y ofrecerse a través de varios canales. Se necesita evaluación y ajuste para asegurar la efectividad.

La introducción de nuevos productos y servicios financieros conlleva riesgos, especialmente para los consumidores inexpertos. Se necesita una infraestructura justa y transparente de protección al consumidor para salvaguardar la confianza de los consumidores y proteger sus derechos.

El gobierno juega un papel de liderazgo en la formulación de políticas y legislación relacionadas con la promoción de la alfabetización financiera y la protección del consumidor. La participación de todas las partes interesadas, incluyendo el sector empresarial y las autoridades supervisoras, en el proceso de formulación es una condición sine qua non para una implementación efectiva a favor de la inclusión financiera.